

No. 55034*

**Mexico
and
Costa Rica**

Treaty between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Costa Rica on the execution of criminal sentences. San José, 15 January 1999

Entry into force: *17 January 2018 by notification, in accordance with article XVIII*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Mexico, 26 March 2018*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Mexique
et
Costa Rica**

Traité entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'exécution des sentences pénales. San José, 15 janvier 1999

Entrée en vigueur : *17 janvier 2018 par notification, conformément à l'article XVIII*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Mexique,
26 mars 2018*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA SOBRE LA
EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES**

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Costa Rica, a quienes en lo sucesivo se les denominará "las Partes";

DESEANDO fomentar la colaboración mutua en materia de ejecución de sentencias penales;

ESTIMANDO que el objeto de la readaptación de los reos es su incorporación a la vida social, después de que han adquirido buena conducta y realizado actividades de diversa naturaleza en los centros de readaptación, que les permitan actuar de manera consecuente en el entorno de nuestros países;

CONSIDERANDO que para el logro de ese objetivo es conveniente dar a los nacionales que se encuentran privados de su libertad en el extranjero, como resultado de la comisión de un delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro de su país, ya que mediante el acercamiento familiar y la posibilidad de vivir conforme a las costumbres de su país, se propicia su reinserción social;

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

DEFINICIONES

Para los fines de este Tratado se entiende que:

a) "**Estado Trasladante**" es el Estado Parte del cual el reo debe ser trasladado.

b) "**Estado Receptor**" es el Estado Parte al que el reo debe ser trasladado.

c) "**Sentencia**" es la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de libertad o restricción de la misma, ya sea que esta última consista de un régimen de libertad condicional, de condena de ejecución condicional o de otras formas de supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal alguno contra ella en el Estado Trasladante y que el término previsto para interponer dicho recurso haya vencido.

d) "**Reo**" es la persona que en el territorio de uno de los Estados Parte cumple una pena privativa de libertad, con motivo de una sentencia firme.

ARTICULO II

ALCANCE

1. Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de Costa Rica, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de ese país o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y de la legislación costarricense.

2. Las penas impuestas en Costa Rica a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de este último país o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y la legislación mexicana.

ARTICULO III

AUTORIDAD COORDINADORA

Para asegurar el debido cumplimiento de la ejecución de las sentencias penales entre las Partes, los Estados Unidos Mexicanos designan como autoridad coordinadora a la Procuraduría General de la República y Costa Rica designa como autoridad coordinadora al Ministerio de Justicia y Gracia, las cuales se encargarán de ejercer todas y cada una de las funciones previstas en el presente Tratado.

ARTICULO IV

CONDICIONES PARA LA APLICACION

El presente Tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1. Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable sea punible en el Estado Receptor; sin embargo, a tal efecto no se tendrá en cuenta las diferencias de denominación o las que no afecten a la especie misma del tipo del delito.

2. Que el reo sea nacional del Estado Receptor. En el momento de la presentación de la solicitud de traslado, el reo deberá acreditar fehacientemente, con documentos públicos, su condición de nacional del Estado Receptor.

3. Que el delito por el cual es sentenciado el reo no sea de tipo político en el Estado Receptor.

4. Que la sentencia impuesta al reo pueda ser cumplida o ejecutada en el Estado Receptor.

5. Que la sentencia mediante la cual se impuso la sanción en ejecución se encuentre firme y que no exista causa legal alguna que impida la salida del reo del territorio nacional. Se entenderá que existe sentencia firme y definitiva en los términos que señala el Artículo I, inciso c) del presente Tratado. Constituye impedimento para autorizar el traslado, la solicitud de extradición formulada por un tercer Estado, que se encuentre en trámite o que haya sido acordado.

6. Que la situación del reo no sea agravada por el traslado.

7. Que la parte de la pena que faltare por cumplirse al momento de efectuarse la solicitud sea mayor de seis meses.

8. Que la pena que esté cumpliendo el reo tenga una duración determinada en la sentencia condenatoria, no mayor a 50 años.

9. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamientos jurídico interno del Estado Receptor.

10. Que el reo otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informado previamente de las consecuencias legales del mismo.

ARTICULO V

SUMINISTRO DE INFORMACION

Las autoridades coordinadoras designadas por las Partes informarán a todo reo nacional de la otra Parte sobre la existencia del Tratado, la posibilidad que le brinda la aplicación del mismo y las consecuencias jurídicas que se derivarían de su traslado. Esta información también podrá ser proporcionada al reo por los agentes consulares de su país.

Las Partes mantendrán informado al reo del trámite de su traslado, así como de las decisiones adoptadas por cualquiera de las Partes respecto de su solicitud de traslado. A tal fin, las Partes facilitarán a las autoridades coordinadoras las informaciones que soliciten.

ARTICULO VI

CONSENTIMIENTO DEL REO

1. El traslado del reo al Estado Receptor sólo procederá a voluntad expresa del mismo, para lo cual podrá contactar a la autoridad competente del Estado Trasladante, para solicitar que se preparen los antecedentes y estudios del reo.

2. La voluntad del reo de ser trasladado debe ser expresada por escrito.

3. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado impedirá que un reo pueda presentar una solicitud para su traslado ante el Estado Trasladante o en el Estado Receptor.

ARTICULO VII

PROCEDIMIENTO PREVIO AL TRASLADO

1. Es potestad discrecional del Estado Trasladante autorizar el traslado y será igualmente facultad discrecional del Estado Receptor aceptarlo.

2. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor verificar, si lo desea, mediante un funcionario designado por éste, que el reo haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.

3. Al tomar la decisión relativa al traslado de un reo, las Partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la gravedad del delito; sus antecedentes penales; su estado de salud y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado Trasladante y en el Estado Receptor.

4. Si el reo solicita su traslado ante la autoridad coordinadora del Estado Trasladante y éste lo considera procedente, transmitirá una solicitud en ese sentido por los canales diplomáticos a la autoridad del Estado Receptor.

5. Si la autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comunicará sin demora al Estado Trasladante e iniciará los procedimientos necesarios para efectuar el traslado del reo. Si no lo acepta, lo hará saber sin demora a la autoridad del Estado Trasladante.

6. Si el reo solicita su traslado ante la autoridad coordinadora del Estado Receptor, éste podrá solicitar a la autoridad coordinadora del Estado Trasladante que se preparen los antecedentes y estudios correspondientes del mismo.

7. Si el Estado Trasladante considera procedente la solicitud de traslado del reo, comunicará dicha resolución al Estado Receptor para que, cumplidas las formalidades internas, se efectúe la entrega de éste.

8. El Estado Trasladante deberá acreditar, si lo solicita el Estado Receptor, que el reo conoce las consecuencias legales que implica el traslado y que otorga libremente su consentimiento para que se lleve a cabo.

ARTICULO VIII

NEGATIVA AL TRASLADO

1. Cuando el Estado Trasladante no apruebe el traslado de un reo, comunicará su decisión de inmediato al Estado Receptor explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente. Cuando se modifiquen las condiciones que sirvieron de base a la negativa del traslado, cualquiera de las Partes podrá solicitar de nuevo el traslado del reo.

2. Si después de cumplir su condena el reo trasladado reincide en la comisión de un delito en el territorio del Estado Trasladante, este último podrá negar cualquier solicitud de traslado del reo formulada por el Estado Receptor o por el mismo reo.

ARTICULO IX

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA

1. El Estado Receptor acompañará a la solicitud de traslado:

- a) un documento que acredite que el reo es nacional de dicho Estado;

- b) una copia certificada de las disposiciones legales de las que resulte que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena constituyen también un delito en el Estado Receptor;
- c) información acerca de los factores pertinentes y la probabilidad de que el traslado contribuya a la inserción social de aquél, tomando en cuenta aspectos como la edad, los vínculos de residencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, en el Estado Receptor, y
- d) información aproximada acerca de cómo se cumplirá la condena en dicho Estado Receptor, especialmente referida a la modalidad y tiempo.

2. El Estado Trasladante acompañará a su solicitud de traslado:

- a) una copia certificada de la sentencia, haciendo constar que es firme;
- b) una copia certificada de las disposiciones legales aplicables;
- c) la indicación de la duración de la pena, el tiempo ya cumplido y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como trabajo, buena conducta y prisión o detención preventiva;
- d) un documento en el que conste el consentimiento del reo para el traslado, y
- e) información sobre la índole y gravedad del delito, los antecedentes penales del reo, las condiciones de salud de éste y cualquier información adicional que pueda ser útil a las autoridades del Estado Receptor.

3. Cualquiera de las Partes podrá, antes de formular una solicitud de traslado, solicitar a la otra Parte los documentos e informaciones a que se refieren los numerales 1 y 2 de este artículo.

ARTICULO X

ENTREGA Y GASTOS DEL TRASLADO

1. Aprobado el traslado, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del reo y la forma como se hará efectiva. El Estado Receptor será el responsable de la custodia y transporte del reo desde el momento de la entrega.

2. Todos los gastos relacionados con el traslado del reo hasta la entrega para su custodia al Estado Receptor serán por cuenta del Estado Trasladante.

3. El Estado Receptor se hará cargo de los gastos de traslado desde el momento en que el reo quede bajo su custodia.

4. El Estado Trasladante no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos efectuados con motivo del cumplimiento de la ejecución de la condena del reo.

ARTICULO XI

JURISDICCION DEL ESTADO TRASLADANTE

El Estado Trasladante mantendrá la jurisdicción exclusiva con referencia a las sentencias impuestas y cualesquiera procedimientos que involucren revisión, modificación o anulación de las sentencias impuestas por sus tribunales de justicia. En consecuencia, el Estado Receptor, al recibir una notificación del Estado Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan, conforme a dicho aviso.

El Estado Trasladante conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia al reo. El Estado Receptor, al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, deberá instrumentar de inmediato las medidas correspondientes.

ARTICULO XII

JURISDICCION DEL ESTADO RECEPTOR

1. El cumplimiento de la sentencia de un reo se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a la reducción del período de prisión por medio de libertad vigilada, libertad condicional o cualquier otra forma alternativa a la prisión.

2. Ninguna pena de prisión será ejecutada por el Estado Receptor, de tal modo que prolongue su duración más allá de la fecha en que quedaría cumplida, de acuerdo con la sentencia del Estado Trasladante.

3. Las autoridades coordinadoras de las Partes intercambiarán cada seis meses informes sobre la situación que guarda la ejecución de las sentencias de todas las personas trasladadas conforme al presente Tratado, incluyendo, en particular, los relativos a beneficios al reo de acuerdo con la legislación interna de cada Parte. Las Partes podrán solicitar, en todo momento, un informe especial sobre la situación que guarde la ejecución de una sentencia individual.

4. Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Tratado, no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el Estado Receptor por el mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada, ni

tampoco se podrá convertir la pena en una sanción pecuniaria. El Estado Receptor no ejecutará acción penal en contra del reo por cualquier delito respecto del cual el ejercicio de la acción penal no sería posible, conforme a las leyes de ese Estado.

5. El que un reo haya sido trasladado conforme a lo establecido en este Tratado, no afectará sus derechos civiles en el Estado Receptor, más allá de lo que pudiera afectarlo, conforme a las leyes del Estado Receptor, por el hecho mismo de haber sido objeto de una condena en el Estado Trasladante.

ARTICULO XIII

APLICACION DEL TRATADO EN CASOS ESPECIALES

1. El presente Tratado también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las leyes de cualquiera de las Partes, relacionadas con infractores menores de edad, siempre que se demuestre la conveniencia del traslado para fines de readaptación. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien está legalmente facultado para otorgarlo.

2. Si así lo acordaren las Partes y a efecto de su tratamiento en el Estado Receptor, el presente Tratado podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente hubiera declarado inimputables. Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo.

3. Por acuerdo especial entre las Partes y por razones humanitarias, los reos de quienes se haya comprobado plenamente que sufren una enfermedad que se encuentre en fase terminal, o sean de edad muy avanzada, podrán ser trasladados para su tratamiento en instituciones del país de su nacionalidad.

4. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes pueden tener para conceder o negar el traslado del reo.

ARTICULO XIV

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

En caso de que algún reo haya utilizado documentación falsa de un nacional del Estado Receptor, para obtener el traslado hacia el territorio de una de las Partes, la autoridad coordinadora de ese Estado realizará los ajustes necesarios para que el reo retorne al Estado Trasladante y termine de cumplir su condena conforme a la sentencia que le fue impuesta, sujetándose a las consecuencias jurídicas que se originen de su conducta.

ARTICULO XV

TRANSITO

Si el reo, al ser trasladado, tuviera que atravesar el territorio de un tercer Estado, éste deberá ser notificado mediante envío de la resolución que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En tales casos, el Estado de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso del reo por su territorio.

Cuando el tercer Estado sea Parte de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Sentencias Penales en el Extranjero, adoptada en Managua, el 9 de junio de 1993, y que no haya formulado una reserva al respecto, no será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje en el territorio del país de tránsito que se vaya a sobrevolar.

ARTICULO XVI

ADECUACION AL DERECHO INTERNO

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Tratado.

ARTICULO XVII

APLICACION

Este Tratado será aplicable al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad o con posterioridad a su entrada en vigor.

ARTICULO XVIII

DISPOSICIONES FINALES

1. Este Tratado será aplicable al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad o con posterioridad a su entrada en vigor, siempre que favorezca al reo.

2. El presente Tratado entrará en vigor en la fecha de recepción de la última Nota diplomática por la que las Partes se notifiquen haber cumplido los requisitos constitucionales respectivos.

3. Este Tratado tendrá una duración indefinida y cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita, a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva sesenta días después de haberse efectuado dicha notificación.

Hecho en la Ciudad de San José, Costa Rica, el quince de enero de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**



Rosario Green
Secretaria de Relaciones
Exteriores

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COSTA RICA**



Roberto Rojas
Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto

[TRANSLATION – TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA ON THE
ENFORCEMENT OF CRIMINAL SENTENCES

The Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Costa Rica, hereinafter referred to as “the Parties”;

Desiring to promote mutual collaboration in respect of the enforcement of criminal sentences;

Being of the view that the purpose of rehabilitating offenders is to enable them to re-enter society once they have demonstrated good behaviour and carried out different types of activities in their place of rehabilitation, so that they can act in a manner in harmony with the environment of our countries;

Considering that that objective would be served by enabling nationals who are deprived of their liberty abroad as a result of committing an offence to serve their sentence in their own country, since bringing them closer to their family and enabling them to live according to the customs of their country will facilitate their reintegration into society;

Have agreed as follows:

Article I. Definitions

For the purposes of this Treaty:

- (a) “Sending State” means the State Party from which the offender is to be transferred.
- (b) “Receiving State” means the State Party to which the offender is to be transferred.
- (c) “Sentence” means the final judicial decision by which deprivation of liberty or restriction of liberty, whether in the form of parole, a suspended sentence or other form of supervision without detention, is imposed on a person as a penalty for the commission of an offence. A sentence is understood to be final when no legal appeal is pending against it in the sending State, or when the time limit set for submitting such an appeal has expired.
- (d) “Offender” means the person who, in the territory of one of the States Parties, is serving a sentence involving deprivation of liberty as a result of a final sentence.

Article II. Scope

1. Sentences imposed in the United Mexican States on nationals of Costa Rica may be served in penal establishments in Costa Rica or under the surveillance of its authorities, in accordance with this Treaty and Costa Rican laws.

2. Sentences imposed in Costa Rica on nationals of the United Mexican States may be served in penal establishments in the United Mexican States or under the surveillance of its authorities, in accordance with this Treaty and Mexican laws.

Article III. Coordinating authority

To ensure due enforcement of criminal sentences between the Parties, the United Mexican States designate as coordinating authority the Office of the Attorney General of the Republic, and the Republic of Costa Rica designates as coordinating authority the Ministry of Justice and Grace. These authorities shall be responsible for carrying out all of the functions envisaged in this Treaty.

Article IV. Conditions for application

This Treaty shall be applied solely under the following conditions:

1. The offence of which the offender has been declared guilty is punishable in the receiving State; nevertheless, nominal differences or differences that do not affect the actual nature of the offence shall not be taken into consideration.

2. The offender is a national of the receiving State. When the request for transfer is submitted, the offender must provide reliable evidence, in the form of public instruments, of his or her status as a national of the receiving State.

3. The offence for which the offender was sentenced is not a political offence in the receiving State.

4. The sentence imposed on the offender can be served or enforced in the receiving State.

5. The sentence by which the penalty being enforced was imposed is firm and there is no legal reason preventing the departure of the offender from the national territory. It shall be considered a final sentence as defined in article 1 (c) of this Treaty. A request for extradition from a third State that is being processed or has been approved shall preclude authorization of the transfer.

6. The situation of the offender would not be made worse by the transfer.

7. More than six months of the sentence remain to be served at the time when the application is made.

8. The sentence being served by the offender is for a fixed term of no more than 50 years.

9. The enforcement of the sentence does not contravene the domestic laws of the receiving State.

10. The offender expressly consents to the transfer, having been previously informed of the legal consequences thereof.

Article V. Provision of information

The coordinating authorities designated by the Parties shall inform all offenders who are nationals of the other Party of the existence of the Treaty, of the option available to them under it, and of any possible legal consequences of the transfer. This information may also be provided to the offender by the consular officials of his or her country.

The Parties shall keep the offender informed of any proceedings relating to the transfer, as well as of any decisions adopted by either Party with respect to the application for transfer. To that end, the Parties shall provide the coordinating authorities with any information they request.

Article VI. Consent of the offender

1. The offender shall be transferred to the receiving State only at the express request of that State, in which case it may contact the competent authority of the sending State to request it to prepare records and studies relating to the offender.
2. The willingness of the offender to be transferred must be expressed in writing.
3. None of the provisions of this Treaty shall prevent an offender from submitting a request for transfer to the sending State or the receiving State.

Article VII. Procedure preceding the transfer

1. The sending State shall have discretionary power to authorize the transfer, and the receiving State shall have discretionary power to accept it.
2. Before the transfer is carried out, the sending State shall permit the receiving State to verify, if it so wishes and through an official it designates, that the offender has consented to the transfer with full knowledge of the legal consequences thereof.
3. In determining whether to transfer an offender, the Parties shall consider, among other factors, the likelihood of furthering his or her social rehabilitation; the seriousness of the offence; his or her criminal record; the state of his or her health; and his or her family ties and social and other connections in the sending State and in the receiving State.
4. If the offender submits a request for transfer to the coordinating authority of the sending State and that authority considers it appropriate, it shall transmit a request to that effect through the diplomatic channel to the authority of the receiving State.
5. If the authority of the receiving State accepts the request, it shall so inform the sending State without delay and initiate the proceedings necessary for the transfer of the offender. If it does not accept the request, it shall so inform the authority of the sending State without delay.
6. If the offender submits a request for transfer to the coordinating authority of the receiving State, the latter may request the coordinating authority of the sending State to prepare the relevant records and studies.
7. If the sending State considers the request for transfer of the offender to be appropriate, it shall so inform the receiving State so that, upon completion of the internal formalities, the offender can be surrendered.
8. If so requested by the receiving State, the sending State shall provide proof that the offender is aware of the legal consequences of the transfer and freely consents to such transfer.

Article VIII. Refusal of the request for transfer

1. If the sending State does not approve the transfer of an offender, it shall immediately communicate its decision to the receiving State and shall explain the reason for its refusal whenever feasible and appropriate. If there is a change in the conditions on which the refusal of the transfer request was based, either Party may again request the transfer of the offender.
2. If, after the sentence has been served, the transferred offender commits another offence in the territory of the sending State, the latter State may refuse any request for transfer of the offender made by the receiving State or by the offender.

Article IX. Supporting documentation

3. The receiving State shall attach to the request for transfer:
 - (a) A document attesting to the fact that the offender is a national of that State;
 - (b) A certified copy of the legal provisions showing that the actions or omissions which gave rise to the sentence are also offences in the receiving State;
 - (c) Information concerning pertinent factors and the likelihood that the transfer will contribute to the reintegration into society of the offender, taking into account such considerations as the offender's age, the connections created by residence in the territory, family ties or other circumstance, in the receiving State;
 - (d) Approximate information concerning the way in which the sentence will be served in the receiving State, particularly with regard to manner and duration.
2. The receiving State shall attach to the request for transfer:
 - (a) A certified copy of the sentence, showing that it is final;
 - (b) A certified copy of the applicable legal provisions;
 - (c) An indication of the duration of the sentence, time already served and time accruing to the offender for such reasons as work, good behaviour and pretrial imprisonment or detention;
 - (d) A document showing that the offender consents to the transfer;
 - (e) Information concerning the nature and seriousness of the offence, the criminal record of the offender, the state of the offender's health and any additional information that might be useful to the authorities of the receiving State.
3. Before formulating a request for transfer, either Party may request the other Party to provide the documents and information referred to in paragraphs 1 and 2 of this article.

Article X. Surrender and transfer expenses

1. Once the transfer is approved, the Parties shall agree on the place and date for the surrender of the offender and the manner in which it is to be effected. The receiving State shall be responsible for the custody and transport of the offender from the moment of surrender.
2. All expenses arising in connection with the transfer until the offender is placed in the custody of the receiving State shall be borne by the sending State.
3. The receiving State shall be responsible for the transfer expenses incurred as from the moment when the offender is placed in its custody.
4. The sending State shall not be entitled to any reimbursement whatsoever of the expenses incurred in connection with the enforcement of the sentence of the offender.

Article XI. Jurisdiction of the sending State

The sending State shall retain exclusive jurisdiction with regard to the sentences imposed and all procedures pertaining to the review, modification or annulment of the sentences imposed by its courts of justice. Consequently, upon receiving notification from the sending State of any decision

that affects a sentence, the receiving State shall take the appropriate measures as specified in the aforesaid notification.

The sending State shall retain the power to commute the sentence or grant the offender an amnesty or pardon. On receiving notification of any such decision, the receiving State must immediately take the appropriate measures.

Article XII. Jurisdiction of the receiving State

1. The sentence of an offender shall be served in accordance with the laws and procedures of the receiving State, including the application of any provision with respect to a reduction of the term of imprisonment by means of probation, parole or any other alternative to imprisonment.

2. The receiving State shall not enforce any penalty involving imprisonment in such a way as to extend its duration beyond the date on which it was due to be completed in accordance with the sentence imposed in the sending State.

3. The coordinating authorities of the Parties shall exchange every six months reports on the status of enforcement of the sentences of all persons transferred under this Treaty, including, in particular, information concerning benefits available to offenders under the domestic law of each Party. The Parties may at any time request a special report on the status of the enforcement of a specific sentence.

4. An offender who has been transferred to serve a sentence under this Treaty may not be detained, tried or sentenced in the receiving State for the same offence that gave rise to the sentence that is to be served, nor may that sentence be converted to a pecuniary penalty. The receiving State shall not initiate criminal proceedings against the offender for any offence which would not be actionable under the laws of that State.

5. The fact that an offender has been transferred under the terms of this Treaty shall not affect the offender's civil rights in the receiving State beyond the effect it would have, under the laws of that State, by the fact of the offender having been sentenced in the sending State.

Article XIII. Application of the Treaty in special cases

1. This Treaty shall also be applicable to persons subject to supervision or other measures under the laws of either Party relating to juvenile offenders, provided that the advisability of the transfer for purposes of readaptation is demonstrated. Consent for transfer must be obtained from whoever is legally empowered to grant it.

2. This Treaty may be applied with respect to persons whom the authority concerned has declared to be not criminally responsible, if the Parties so agree and in order that the person concerned may receive treatment in the receiving State. The Parties shall agree on the type of treatment to be given to the transferred person in accordance with their domestic laws. Consent for transfer must be obtained from whoever is legally empowered to grant it.

3. By special agreement between the Parties and for humanitarian reasons, offenders who have been conclusively proved to be in the terminal phase of an illness, or who are very old, may be transferred for treatment to institutions in the country of their nationality.

4. No provision of this Treaty shall be interpreted in such a way as to limit the power of the Parties to grant or refuse to grant the transfer of the offender.

Article XIV. Forgery of documents

If an offender uses forged documents to claim the nationality of the receiving State with a view to obtaining a transfer to the territory of one of the Parties, the coordinating authority of that State shall make the necessary arrangements for the offender to return to the sending State, where the offender shall complete the sentence imposed on him or her and be subject to the legal consequences of his or her conduct.

Article XV. Transit

If the offender, while being transferred, must cross the territory of a third State, the latter should be notified through transmittal of the decision granting the transfer by the State under whose custody the transfer is to be effected. In such cases, the transit State may or may not consent to the transit of the offender through its territory.

If the third State is a party to the Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad, adopted at Managua on 9 June 1993, and has not formulated a reservation thereto, such notification shall not be necessary when air transport is used and no landing is scheduled in the territory of the transit country that is to be overflown.

Article XVI. Alignment with domestic law

The Parties undertake to adopt the necessary legislative measures and to establish adequate administrative procedures to fulfil the purposes of this Treaty.

Article XVII. Application

This Treaty shall apply to the execution of sentences imposed either before or after its entry into force.

Article XVIII. Final provisions

1. This Treaty shall apply to the execution of sentences imposed either before or after its entry into force, provided that this benefits the offender.

2. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the final diplomatic note by which the Parties notify each other of their compliance with the respective constitutional requirements.

3. This Treaty shall have an indefinite duration and either Party may terminate it by giving written notice through the diplomatic channel. The termination shall take effect 60 days after such notice has been given.

DONE at San José, Costa Rica, on 15 January 1999, in two original copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the United Mexican States:

ROSARIO GREEN

Secretary for Foreign Affairs
For the Government of the Republic of Costa Rica:
ROBERTO ROJAS
Minister for Foreign Affairs and Worship

[TRANSLATION – TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA RELATIF À
L'EXÉCUTION DES SENTENCES PÉNALES

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Costa Rica, ci-après dénommés les « Parties » ;

DÉSIREUX de favoriser la collaboration mutuelle touchant l'exécution des sentences pénales ;

ÉTANT D'AVIS que la réinsertion des délinquants a pour objet de leur permettre de réintégrer la société après qu'ils ont fait preuve de bonne conduite et ont exercé différents types d'activités sur le lieu de leur réinsertion, de sorte qu'ils puissent agir d'une manière adéquate dans les deux pays ;

CONSIDÉRANT que pour atteindre cet objectif, il y aurait intérêt à donner aux ressortissants privés de leur liberté à l'étranger pour avoir commis une infraction, la possibilité de purger leur peine dans leur propre pays, leur réinsertion dans la société étant alors facilitée par le rapprochement avec leur famille et par la possibilité de vivre conformément aux coutumes de leur pays ;

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. DÉFINITIONS

Aux fins du présent Traité :

- a) « État d'envoi » désigne l'État Partie à partir duquel le délinquant doit être transféré ;
- b) « État d'accueil » désigne l'État Partie vers lequel le délinquant doit être transféré ;
- c) « Sentence » désigne la décision judiciaire définitive par laquelle une privation ou une restriction de liberté, que ce soit sous la forme d'une libération conditionnelle, d'une condamnation avec sursis ou d'une autre forme de contrôle sans détention, est imposée à une personne à titre de sanction pour la commission d'une infraction. Une sentence est considérée comme définitive lorsqu'aucun recours juridique n'est en cours dans l'État d'envoi ou lorsque les délais prévus pour un tel recours ont expiré ;
- d) « Délinquant » désigne la personne qui purge une peine privative de liberté sur le territoire de l'un des États Parties, en application d'une sentence définitive.

ARTICLE II. CHAMP D'APPLICATION

1. Les sentences prononcées aux États-Unis du Mexique à l'encontre de ressortissants du Costa Rica peuvent être purgées dans des établissements pénitentiaires au Costa Rica ou sous la surveillance des autorités de ce dernier, conformément aux dispositions du présent Traité et de la législation costaricaine.

2. Les sentences prononcées au Costa Rica à l'encontre de ressortissants des États-Unis du Mexique peuvent être purgées dans des établissements pénitentiaires aux États-Unis du Mexique

ou sous la surveillance des autorités de ces derniers, conformément aux dispositions du présent Traité et de la législation mexicaine.

ARTICLE III. AUTORITÉ DE COORDINATION

Aux fins de l'exécution stricte des sentences pénales entre les Parties, les États-Unis du Mexique désignent le Bureau du Procureur général de la République en tant qu'autorité de coordination et la République du Costa Rica désigne le Ministère de la justice et des grâces en tant qu'autorité de coordination. Lesdites autorités sont chargées d'exercer toutes les fonctions prévues dans le présent Traité.

ARTICLE IV. CONDITIONS D'APPLICATION

Le présent Traité s'applique uniquement dans les conditions suivantes :

1. L'infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable est passible d'une peine dans l'État d'accueil ; il n'est toutefois pas tenu compte des différences d'appellation ou des différences qui ne concernent pas la nature de l'infraction ;

2. Le délinquant est un ressortissant de l'État d'accueil. Au moment de soumettre sa demande de transfèrement, le délinquant doit fournir une preuve valable, sous la forme d'instruments publics, de son statut de ressortissant de l'État d'accueil ;

3. L'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné n'est pas de nature politique dans l'État d'accueil ;

4. La sentence prononcée peut être purgée ou exécutée dans l'État d'accueil ;

5. La sentence au titre de laquelle la peine a été imposée a force exécutoire et il n'existe aucun motif de droit qui empêche le délinquant de quitter le territoire national. Elle est considérée comme définitive au sens de l'alinéa c) de l'article premier du présent Traité. Une demande d'extradition présentée par un État tiers, qui est en cours ou a été approuvée, exclut toute autorisation de transfèrement.

6. La situation du délinquant ne doit pas être aggravée par le transfèrement.

7. La durée de la peine restant à purger au moment où la demande est présentée est supérieure à six mois.

8. La peine purgée par le délinquant est une peine fixe d'une durée maximale de 50 ans.

9. L'exécution de la peine ne contrevient pas aux lois internes de l'État d'accueil.

10. Le délinquant donne son consentement exprès au transfèrement et a été informé au préalable des conséquences juridiques de celui-ci.

ARTICLE V. FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS

Les autorités de coordination désignées par les Parties informent tous les délinquants qui sont ressortissants de l'autre Partie de l'existence du Traité, des possibilités qui leur sont offertes en vertu des dispositions de celui-ci et de toutes les conséquences juridiques éventuelles du transfèrement. Ces informations peuvent également être communiquées au délinquant par les agents consulaires de son pays.

Les Parties tiennent le délinquant informé de toute procédure relative au transfèrement et de toute décision adoptée par l'une d'elles en ce qui concerne la demande de transfèrement. À cette fin, elles fournissent aux autorités de coordination tout renseignement que celles-ci peuvent demander.

ARTICLE VI. CONSENTEMENT DU DÉLINQUANT

1. Le délinquant n'est transféré dans l'État d'accueil qu'à la demande expresse dudit État qui, à cette fin, peut prendre contact avec l'autorité compétente de l'État d'envoi pour demander à celle-ci de préparer le dossier et les documents reprenant les antécédents du délinquant.

2. Le délinquant doit exprimer sa volonté d'être transféré par écrit.

3. Aucune disposition du présent Traité n'empêche le délinquant d'adresser une demande de transfèrement à l'État d'envoi ou à l'État d'accueil.

ARTICLE VII. PROCÉDURE PRÉALABLE AU TRANSFÈREMENT

1. L'État d'envoi dispose du pouvoir discrétionnaire d'autoriser le transfèrement et l'État d'accueil dispose du pouvoir discrétionnaire de l'accepter.

2. Avant que le transfèrement n'ait lieu, l'État d'envoi autorise l'État d'accueil à vérifier, si celui-ci le souhaite et par l'intermédiaire d'un agent qu'il désigne, que le délinquant a bien consenti au transfèrement, et ce, en parfaite connaissance de ses conséquences juridiques.

3. Aux fins de déterminer si le délinquant doit être transféré, les Parties examinent, entre autres facteurs, la probabilité que le transfèrement contribue à la réinsertion sociale du délinquant, la gravité de l'infraction que ce dernier a commise, son casier judiciaire, son état de santé, ses liens familiaux, sociaux et autres dans l'État d'envoi et dans l'État d'accueil.

4. Si le délinquant présente une demande de transfèrement à l'autorité de coordination de l'État d'envoi et que ladite autorité estime que le transfèrement est justifié, elle transmet une demande à cet effet à l'autorité de coordination de l'État d'accueil par la voie diplomatique.

5. Si l'autorité de l'État d'accueil accepte la demande, elle en informe sans délai l'État d'envoi et entreprend les démarches nécessaires au transfèrement du délinquant. Dans le cas contraire, elle informe sans délai l'autorité de l'État d'envoi de son refus.

6. Si le délinquant présente une demande de transfèrement à l'autorité de coordination de l'État d'accueil, cette dernière peut demander à l'autorité de coordination de l'État d'envoi de préparer le dossier et les documents reprenant les antécédents du délinquant.

7. Si l'État d'envoi estime que la demande de transfèrement du délinquant est justifiée, il en informe l'État d'accueil afin que la remise du délinquant puisse avoir lieu dès l'achèvement des formalités internes requises.

8. Si l'État d'accueil le demande, l'État d'envoi fournit la preuve que le délinquant est informé des conséquences juridiques du transfèrement et qu'il a librement consenti audit transfèrement.

ARTICLE VIII. REFUS DE LA DEMANDE DE TRANSFÈREMENT

1. Si l'État d'envoi refuse le transfèrement d'un délinquant, il communique immédiatement sa décision à l'État d'accueil et donne les raisons de son refus si cela est possible et approprié. En cas de changement des circonstances ayant motivé le refus, l'une ou l'autre Partie peut présenter une nouvelle demande de transfèrement du délinquant.

2. Si, une fois la peine purgée, le délinquant se rend coupable d'une autre infraction sur le territoire de l'État d'envoi, ce dernier peut refuser de donner droit à toute demande de transfèrement présentée par l'État d'accueil ou par le délinquant.

ARTICLE IX. PIÈCES JUSTIFICATIVES

1. L'État d'accueil joint à la demande de transfèrement :

- a) un document attestant que le délinquant est bien l'un de ses ressortissants ;
- b) un exemplaire certifié conforme des dispositions juridiques indiquant que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la sentence constituent également des infractions dans l'État d'accueil ;
- c) des renseignements relatifs aux facteurs pertinents et à la probabilité que le transfèrement contribue à la réinsertion du délinquant dans la société, compte tenu de considérations telles que l'âge du délinquant, les liens créés en résidant sur le territoire, les liens familiaux et d'autres circonstances, dans l'État d'accueil ;
- d) des renseignements généraux concernant la manière dont la peine sera purgée dans l'État d'accueil, notamment les modalités et la durée de la peine.

2. L'État d'envoi joint à la demande de transfèrement :

- a) un exemplaire certifié conforme de la sentence, attestant qu'elle est définitive ;
- b) un exemplaire certifié conforme des dispositions juridiques applicables ;
- c) une indication de la durée de la peine, de la durée de la peine déjà purgée et des réductions de la durée de la peine dont peut bénéficier le délinquant pour bonne conduite, travail et incarcération ou détention provisoire ;
- d) un document attestant que le délinquant consent au transfèrement ;
- e) des renseignements concernant la nature et la gravité de l'infraction, le casier judiciaire du délinquant, son état de santé et tout renseignement additionnel qui pourrait être utile aux autorités de l'État d'accueil.

3. Avant de présenter une demande de transfèrement, l'une des Parties peut demander à l'autre Partie de fournir les pièces et renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

ARTICLE X. REMISE DU DÉLINQUANT ET FRAIS DE TRANSFÈREMENT

1. Une fois le transfèrement approuvé, les Parties conviennent du lieu et de la date de la remise du délinquant et de la manière dont elle doit être effectuée. L'État d'accueil est responsable de la garde et du transport du délinquant à partir du moment de sa remise.

2. Tous les frais occasionnés par le transfèrement jusqu'à la remise du délinquant à l'État d'accueil sont à la charge de l'État d'envoi.

3. L'État d'accueil prend à sa charge les frais du transfèrement à compter du moment où le délinquant est placé sous sa garde.

4. L'État d'envoi ne peut prétendre à aucun remboursement pour les frais occasionnés par l'exécution de la peine du délinquant.

ARTICLE XI. COMPÉTENCE DE L'ÉTAT D'ENVOI

L'État d'envoi a compétence exclusive en ce qui concerne les sentences prononcées et toutes les procédures touchant la révision, la modification ou l'annulation des sentences prononcées par ses tribunaux. En conséquence, dès que l'État d'envoi notifie à l'État d'accueil toute décision concernant la sentence, ce dernier prend toutes les mesures appropriées telles que spécifiées dans ladite notification.

L'État d'envoi conserve la capacité de commuer la peine du délinquant ou de lui accorder l'amnistie ou la grâce. Dès qu'il est informé d'une telle décision, l'État d'accueil doit prendre immédiatement les mesures qui s'imposent.

ARTICLE XII. COMPÉTENCE DE L'ÉTAT D'ACCUEIL

1. La peine infligée au délinquant est purgée conformément aux lois et procédures de l'État d'accueil, y compris l'application de toute disposition relative à la réduction de la durée de l'emprisonnement, telle que la liberté surveillée, la liberté conditionnelle ou toute autre mesure autre que l'emprisonnement.

2. L'État d'accueil n'applique aucune peine d'emprisonnement qui aurait pour effet de prolonger la durée d'emprisonnement au-delà de la date d'échéance prévue dans la sentence prononcée dans l'État d'envoi.

3. Les autorités de coordination des Parties se font mutuellement rapport tous les six mois sur l'état d'exécution des sentences imposées à toutes les personnes transférées en application du présent Traité et s'échangent également des renseignements concernant les avantages offerts aux délinquants en vertu de la législation interne de chaque Partie. Les Parties peuvent demander à tout moment de recevoir un rapport spécial sur l'état d'exécution d'une peine en particulier.

4. Un délinquant transféré pour purger une peine conformément au présent Traité ne peut être placé en détention, jugé ou condamné dans l'État d'accueil pour la même infraction que celle qui a donné lieu à la peine devant être purgée ; ladite peine ne peut pas non plus être convertie en sanction pécuniaire. L'État d'accueil n'engage pas de poursuites pénales contre le délinquant pour toute infraction qui ne serait pas passible de poursuites en vertu des lois dudit État.

5. Le fait qu'un délinquant ait été transféré en application du présent Traité n'a aucun effet sur ses droits civils dans l'État d'accueil, autre que ceux qu'aurait entraînés, conformément aux lois dudit État, sa condamnation dans l'État d'envoi.

ARTICLE XIII. APPLICATION DU TRAITÉ DANS DES CAS SPÉCIAUX

1. Le présent Traité s'applique également aux personnes faisant l'objet d'une surveillance ou soumises à toute autre mesure, en vertu des lois de l'une ou l'autre Partie, relative aux jeunes délinquants, à condition qu'il soit démontré que le transfèrement est recommandé à des fins de

réinsertion. Le consentement au transfèrement doit être obtenu de la personne légalement habilitée à ce faire.

2. Le présent Traité peut être appliqué à l'égard des personnes que l'autorité concernée a déclarées non responsables sur le plan pénal, si les Parties en conviennent et afin que la personne concernée puisse recevoir un traitement dans l'État d'accueil. Les Parties conviennent du type de traitement à accorder à la personne transférée conformément à leur législation interne. Le consentement au transfèrement doit être obtenu de la personne légalement habilitée à ce faire.

3. Par accord spécial des Parties et pour des raisons humanitaires, les délinquants ayant prouvé de manière conclusive qu'ils étaient en phase terminale d'une maladie ou qui sont très âgés, peuvent être transférés dans une institution du pays de leur nationalité pour y recevoir un traitement.

4. Aucune disposition du présent Traité n'est interprétée de manière à limiter le pouvoir dont disposent les Parties d'accéder ou non à une demande de transfèrement d'un délinquant.

ARTICLE XIV. FALSIFICATION DE PIÈCES

Si un délinquant utilise des documents falsifiés pour prouver qu'il est un ressortissant de l'État d'accueil de façon à être transféré vers le territoire de l'une des Parties, l'autorité de coordination dudit État prend les mesures nécessaires pour qu'il retourne dans l'État d'envoi afin d'y purger la peine qui lui a été infligée et de subir les conséquences juridiques de ses actes.

ARTICLE XV. TRANSIT

Si le transfèrement du délinquant implique le transit par le territoire d'un État tiers, ledit État tiers doit en être informé par l'État responsable du transfèrement, qui lui envoie la décision d'approbation du transfèrement. Dans de tels cas, l'État de transit a la latitude de consentir au transit par son territoire ou de s'y opposer.

Si l'État tiers est partie à la Convention interaméricaine sur l'exécution des décisions rendues par les juridictions pénales étrangères, adoptée à Managua le 9 juin 1993, et n'a pas formulé de réserves à son égard, ladite notification n'est pas nécessaire lorsque le transport a lieu par voie aérienne et qu'il n'est prévu aucun atterrissage dans le pays de transit dont le territoire doit être survolé.

ARTICLE XVI. HARMONISATION DE LA LÉGISLATION INTERNE

Les Parties s'engagent à adopter les mesures législatives nécessaires et à mettre en place les procédures administratives appropriées aux fins de la mise en œuvre des objectifs du présent Traité.

ARTICLE XVII. CHAMP D'APPLICATION

Le présent Traité s'applique à l'exécution des sentences prononcées avant comme après son entrée en vigueur.

ARTICLE XVII. DISPOSITIONS FINALES

1. Le présent Traité s'applique à l'exécution des sentences prononcées avant comme après son entrée en vigueur, dans la mesure où une telle application est avantageuse pour le délinquant.

2. Le présent Traité entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des notes diplomatiques par lesquelles les Parties s'informent mutuellement qu'elles ont satisfait à leurs exigences constitutionnelles respectives.

3. Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée et chacune des Parties peut le dénoncer moyennant une notification écrite transmise par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet 60 jours après la date de ladite notification.

FAIT à San José (Costa Rica) le 15 janvier 1999 en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique :

ROSARIO GREEN

Secrétaire aux relations extérieures

Pour le Gouvernement de la République du Costa Rica :

ROBERTO ROJAS

Ministre des relations extérieures et du culte